

IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2011.

De diciembre de 2001 a la crisis del paro agrario.

Gabriel Merino.

Cita:

Gabriel Merino (2011). *De diciembre de 2001 a la crisis del paro agrario. IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-034/573>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

DE DICIEMBRE DE 2001 A LA CRISIS DEL PARO AGRARIO

Gabriel E. Merino

Lic. en Sociología, becario del Conicet, doctorando, CISH-IdIHCS-UNLP.

merinogabriel@yahoo.com.ar

El presente trabajo constituye un análisis, sostenido por investigaciones empíricas en curso, de algunos hechos centrales del proceso político-económico de la Argentina entre la crisis del 2001 y la crisis del paro agrario. No se pretende presentar una visión acabada del proceso, ni una definición exacta del kirchenismo, sino un conjunto de claves, interpretaciones e hipótesis de trabajo, con énfasis en los aspectos político-económicos y en el análisis de relaciones de fuerzas.

Comenzamos por el “estallido” de diciembre de 2001 en Argentina como un hecho síntesis en la lucha por la hegemonía, que guarda relación con un proceso de crisis de hegemonía global, por el cual los grandes intereses financieros transnacionales y su proyecto estratégico neoliberal encuentran límites, contradicciones e incluso quiebres al interior de su fuerza. Hay dos grandes sectores, con ciertas articulaciones, que se enfrentan a dicho proyecto: una fracción de la llamada clase dominante, aglutinados en el Movimiento Productivo Nacional y en las figuras de Duhalde y Alfonsín, y por otro lado, el heterogéneo campo popular.

La transición del gobierno de Duhalde, que procuró expresar a través de sus medidas los intereses del llamado Movimiento Productivo Nacional (MERCOSUR, pesificación y devaluación), pero que debe integrar mínimamente y de forma subordinada a los sectores del llamado campo popular para pararse como una opción hegemónica, sirve de clave para entender la emergencia del kirchnerismo.

En octubre de 2005, con la victoria del Kirchnerismo sobre el Duhaldismo en las elecciones legislativas, se entra en un nuevo momento del proceso político social, que tendrá en el centro de la escena los siguientes ejes de discusión: aumento de salarios, inflación, gasto público, el ingreso de Venezuela al Mercosur y su alianza estratégica con la Argentina, y el rechazo o no al ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas).

El “paro agrario” constituye el punto de quiebre estratégico en el estado de correlación de fuerzas en Argentina, que reconfigura completamente la composición de fuerzas del gobierno. La aparente “recomposición institucional” que se da desde 2003, en realidad es el proceso de desenvolvimiento de las contradicciones y la profundización de las tensiones en la lucha por la hegemonía antes de su estallido, cuando todos los intereses crecen y se encuentran con capacidad de expresarse institucionalmente, es decir, antes del punto en donde la reproducción de ese equilibrio catastrófico se vuelve imposible y el kirchnerismo profundiza su definición hacia una de las opciones estratégicas en pugna.

Los hechos de diciembre de 2001

El 19 y 20 de diciembre constituye un hecho síntesis en la lucha por la hegemonía en Argentina, que guarda relación con un proceso de crisis de hegemonía global, por el cual los grandes intereses financieros y su proyecto estratégico neoliberal, encuentran límites, contradicciones e incluso quiebres al interior de su fuerza.

Dos grandes caminos, en donde se hallan multiplicidad de intereses y visiones, pugnan por

imponerse en la Argentina del 2001: ir hacia una etapa superior de la estrategia neoliberal angloamericana con la dolarización de la economía, la adhesión absoluta al libre comercio global y la hiper-especialización de la economía Argentina bajo el modelo financiero agro-exportador; o, por otro lado, romper con esta estrategia, abrir el juego a otro conjunto de actores y articular una fuerza definida en función de ciertos ejes fundamentales, que brota en una actitud defensiva y de freno a la etapa superior del proyecto de dolarización y profundización de la transnacionalización de la Argentina, con una conducción clara por parte fracciones de la clase dominante que logra capitalizar el proceso de resistencia al neoliberalismo. Esta conducción es quien logra imponer sus banderas y encolumna bajo puntos comunes a esta fuerza: la pesificación de la economía como rechazo a las dolarización de hecho y la integración regional –aunque sea en aspectos mínimos- como resistencia a la completa subordinación global o regional-continental (ALCA).

Estos dos caminos constituyen los polos que configuran la contradicción sobre la que se alinean el conjunto de clases, fracciones y grupos sociales en la Argentina de 2001 y que algunos denominan como devaluacionistas vs dolarizadores.¹ Y esta contradicción se agudizó a medida de que el dispositivo central de avance del proyecto estratégico neoliberal sobre el país –la convertibilidad 1 a 1 del peso y el dólar- se agotaba y avanzaban las luchas populares contra el “modelo”. A primera vista, se observan por lo menos tres fuerzas en pugna (aunque veremos más): dos bloques diferenciados en las llamadas clases dominantes y los habitualmente llamados “sectores populares” o del “campo del pueblo” (organizaciones de trabajadores, de trabajadores desocupados, estudiantiles, del pequeño empresariado urbano y rural, cooperativistas, etc.)

El enfrentamiento al interior de lo que habitualmente se denominan las “clases dominantes” es más complejo aún de lo que se delimita entre “devaluacionistas” y “dolarizadores”. Existe un quiebre incluso en los denominados “dolarizadores” o aquellas fracciones ganadoras a partir del golpe de mercado de la hiperinflación de 1989, que en la bibliografía aparece como los “acreedores externos”² pero que en realidad, al ser capitales financieros multinacionales o transnacionales, constituyen grandes bancos y fondos de inversión que también poseen las empresas multinacionales productivas (industriales y agrarias), como también de distribución y del gran comercio.

La llamada “comunidad de negocios” (Basualdo,), bajo la hegemonía neoliberal cristalizada en el consenso de Washington, avanzó sin fisuras durante los primeros años de la década del 90’ con la privatización y transnacionalización de la economía, con la destrucción del tejido industrial y de las empresas estratégicas de estado que constituían un elemento fundamental en el desarrollo relativo de soberanía, con la destrucción de lo público y privatización del Estado, y con la conformación de los multimedios y la construcción de los Medios Masivos de Formación de Opinión como dispositivo central en la construcción de hegemonía.

Dos grandes estrategias se observan al interior de la fracción dominante de las clases dominantes, que se manifiestan claramente en la Argentina en el año 2001 cuando, entrada en crisis la convertibilidad, se quiere ir hacia una etapa superior del neoliberalismo en la Argentina. Por un lado, la estrategia ligada al gobierno norteamericano de George W. Bush (hijo) de avanzar fuertemente con el proyecto estratégico ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas) y la adopción del dólar como moneda doméstica regional luego de una fuerte devaluación, aunque sin responsabilidad formal de la Reserva Federal de EEUU (Banco Central). Por otro lado, la idea-fuerza de profundizar el proceso globalizador –la estrategia globalista— profundizando las medidas librecambistas, constituir o favorecer la consolidación de áreas de libre comercio regionales que no constituyan bloques de poder autónomos (MERCOSUR sólo como área de libre comercio) y avanzar

en el acercamiento a la estrategia de la conformación de una institucionalidad monetaria global, avanzando localmente en la ampliación de la convertibilidad a través de una canasta de monedas como intentó hacer Domingo Cavallo.

Estas diferencias, que terminan de manifestarse en la Argentina con la reestructuración de la deuda pública en junio de 2001, se expresaban acabadamente en sus grandes intelectuales y cuadros (y en los enfrentamientos entre ellos), así como también en los medios de comunicación que le eran afines o de su propiedad. Los referentes del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos), el think tank fuertemente vinculado a ciertos sectores del partido republicano de los EEUU y a la Escuela de Chicago, eran los que sostenían, legitimaban y reclamaban la urgente necesidad de ir hacia la dolarización. Del CEMA provenían Pedro Pou y Roque Fernández quienes habían ocupado el Banco Central de la República Argentina y el Ministerio de Economía respectivamente durante la segunda presidencia de Menem, y desde ese entonces impulsaban la dolarización. Por otro lado, Domingo Cavallo y sus seguidores representaban para el 2001 la segunda opción: avanzar con una canasta de monedas, intentar mantener la Convertibilidad para que no pierdan valor los activos locales de las transnacionales y multinacionales, y ante la urgencia de una situación explosiva dolarizar de hecho la economía a partir del corrimiento masivo hacia dicha moneda del conjunto de ahorros y operaciones. Este modelo dolarizador implicaba mantener la convertibilidad para mantener el valor de los activos en dólares y el valor en dólares de la facturación de las empresas.

Una de las principales formas en que aparece durante el 2001 la puja de intereses en Argentina se expresa en la cantidad de propuestas y debates sobre la política monetaria a seguir. Desde distintos sectores de las clases dominantes se impulsaban, de acuerdo a criterios tácticos y coyunturales o estratégicos y estructurales, diferentes esquemas económico-monetarios: dolarización manteniendo la convertibilidad, devaluación, con posterior dolarización, convertibilidad sin dolarización, pesificación mediante convertibilidad ampliada con canasta de monedas incluyendo en la misma el real, pesificación con devaluación.

Los cinco esquemas propuestos y defendidos por distintos economistas, grupos de poder, actores económicos-sociales, etc., se ordenan en el enfrentamiento político en dos campos que conforman dos grandes bloques de alianzas (con sus discusiones y contradicciones al interior), que en la superficie política de la lucha por la hegemonía aparecen como dolarizadores vs. pesificadores, es decir, como la batalla por la moneda que hace a uno de los resortes principales para el control del territorio social. A diferencia de lo que sostienen algunos autores, como los mencionados anteriormente, la cuestión central no era la de dolarización vs devaluación —más allá de que así se enuncie periodísticamente construyendo el eje antinómico favorable a ciertos intereses dolarizadores por la experiencia histórica traumática que encierra la palabra “devaluación”—, lo que está en juego y para lo que sirve la devaluación desde el punto de visto de los pesificadores (porque hay dolarizadores que también pretendían previamente devaluar) era para sostener la moneda propia y no terminar de dolarizar por completo la economía. Lo que está en juego es la moneda, como equivalente general y reserva de valor, como cuestión imprescindible para el control relativo de la política monetaria y por lo tanto como expresión de una relación de fuerzas. Por ello, ante la posibilidad concreta de dolarización manteniendo el 1 a 1 que impulsa de facto el Ministro de economía Domingo Cavallo, el llamado grupo productivo (grupos económicos locales y europeos) y las dos CGT, comenzaron a manifestarse fuertemente en contra de dicha medida³ durante los primeros días de diciembre preparando el terreno para una confrontación más aguda.

Además de las posiciones con respecto a la política monetaria, la lucha por la hegemonía

en Argentina, es decir la lucha en términos económicos, políticos y estratégicos-ideológicos-culturales para imponer un modo de vida socialmente legitimado en términos prácticos y teóricos, aparece bajo la forma de la antinomia política **Proyecto Financiero vs. Proyecto Productivo**, en función de la cual se intenta alinear y organizar al conjunto de la sociedad. Cuando la lucha entre fracciones adquiere la forma de antinomia política indica que la fracción de la llamada “clase dominante” que se encontraba “perdiendo” en el terreno de la lucha económica pasa a librar dicha disputa en el terreno político, en donde puede fortalecerse estableciendo alianzas con un conjunto de fracciones y grupos subordinados, incluyéndolos dentro de un proyecto.

La antinomia Proyecto Financiero vs Proyecto Productivo es instalada desde las fracciones subordinadas de la clase dominante (grupos económicos locales y europeos), que vienen perdiendo terreno a partir del segundo mandato de Menem (siendo desplazadas en las privatizadas, en la pérdida de los bancos locales, etc.) y que la etapa superior del modelo neoliberal les significa prácticamente su desaparición como grupo de poder, con capacidad de influir determinantemente sobre un territorio social.

Es con la profundización de estas fisuras, que se hacen visibles desde mediados de los 90' pero que van tomando fuerza hasta llegar a momentos de ruptura (y, por lo tanto, de crisis), que avanzan las organizaciones del conjunto de las clases y fracciones excluidas (trabajadores ocupados y desocupados, obreros, técnicos y profesionales; pequeños y medianos empresarios; productores; cooperativistas; etc.) en mayores grados de articulación y organización.

Para 2001, la antinomia Proyecto Financiero vs. Proyecto Productivo como eje de conducción refiere a un enfrentamiento central en las “clases dominantes” en función de la cual se alinean y juegan, dentro de un orden determinado, distintos grupos, intereses y sectores: Proyecto Neoliberal con núcleo en EEUU e Inglaterra vs. Proyecto estratégico MERCOSUR, en donde dicho espacio constituye un bloque de poder con autonomía para el desarrollo productivo y no solamente un área de libre comercio mediante la cual avanzan las redes financieras transnacionales. Esta es el enfrentamiento que explica y contiene al enfrentamiento sobre el tipo de cambio pero va más allá de eso, ya que define una territorialidad y un modelo particular de capitalismo.

El bloque MERCOSUR-pesificación-desarrollo regional está conformado por una multiplicidad de intereses nucleados alrededor del Movimiento Productivo Argentino (MPA), expresando acabadamente, tanto en la amalgama de actores que lo conforman como en su expresión político-ideológica. El MPA, con Eduardo Duhalde (Partido Justicialista) y Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical) como protagonistas centrales, se constituye para impulsar un “*nuevo movimiento nacional empresario*”, es decir, un bloque de poder de estado, que se despliega como fuerza político-social (además de económica). El 22 de junio de 2001 se produce su lanzamiento formal y en su carta fundacional plantea un cambio del modelo económico. “*El pensamiento productivo está disperso y hay que ubicarlo en el centro de la escena, a la vez que hay que desplazar al poder financiero*”^{4, 5}

Los principales actores aglutinados y convocados bajo el ala política del duhaldismo (PJ) y el alfonsinismo (UCR) en el Movimiento Productivo Argentino (MPA) son: los Grupos Económicos Locales-Regionales nucleados en la Unión Industrial Argentina (UIA), con actuación destacada de Techint, Perez Companc, Arcor, Ledezma, De Mendiguren y las textiles, y multinacionales europeas como la FIAT; la Cámara Argentina de la Construcción (CAC); el nucleamiento agrícola denominado Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que representa a un segundo nivel de grandes propietarios rurales; el grupo BAPRO y el conjunto de Bancos Públicos y cooperativos, además de los bancos locales, junto con algunos extranjeros de menor escala. En este bloque de poder, el Grupo Clarín actúa

como el principal órgano ideológico-mediático. Por otra parte, era muy importante la presencia de la cúpula de la Iglesia Católica.

De los sectores de pequeña y mediana empresa, se encontraban cercanos al “grupo productivo” o coordinando acciones con el MPA y estableciendo alianzas tácticas la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), ADIMRA (metalúrgicas), la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (APYME) y la Federación Agraria Argentina, cuyo titular, Eduardo Buzzi, tuvo una activa presencia.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), entidad constituida en plena crisis el mayo de 2002 para apoyar al gobierno de Duhalde (en dificultades ante las presiones del FMI y el “bloqueo financiero” por un lado, y de los sectores populares por el otro), expresa con más exactitud, coherencia y plenitud los intereses del “grupo productivo”. Dicha entidad en su fundación estaba presidida por Oscar Vicente de Perez Companc, quien se encontraba secundado en la comisión directiva por los vicepresidentes Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Amalita Fortabat (Loma Negra), José Ranero Díaz (YPF), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Enrique Pescarmona (IMPESA), Manuel Sacerdote (BankBoston) y Carlos Miguens (Grupo Bemberg). José Cartellone era el secretario; Alfredo Coto, el tesorero, y ejercían como vocales Arturo Acevedo (Acindar), Aldo Roggio (Grupo Roggio), Federico Braun (La Anónima), Luis Bameule (Quickfood), Juan Peirano (Grupo Velox), Oscar Vignart (Dow Química), Miguel Acevedo (Aceitera Deheza), Juan Carlos Masjoan (Telecom), Eduardo Elsztain (IRSA) y Pablo Roemmers (Roemmers).⁶

El “Proyecto Productivo” pareciera ser en términos concretos un neo-desarrollismo dependiente de fuerte perfil agro-alimentario exportador (lo que incluye a las industrias de la alimentación, agro-industrias, metalmecánica de maquinaria agrícola, puertos, administración, bancos) comandado por grupos financieros (ya que concentran los negocios industriales, bancarios, comerciales, agrarios, etc.), tanto locales como “europeos” (principalmente italianos y españoles)⁷, de una escala mucho menor y una composición orgánica menos dinámica que las redes financieras transnacionales, con un fuerte asiento en el sector productivo agroalimentario, en industrias livianas y en industrias de bienes intermedios (petróleo, aluminio, acero), que necesitan conformar un área de relativa independencia para su desarrollo, es decir, para su acumulación ampliada. Esta relativa independencia se basa en el establecimiento de una territorialidad propia (MERCOSUR), una moneda propia, cierto grado de proteccionismo y de intervención estatal, cierto grado de distribución de la riqueza y de fortalecimiento del mercado interno (en términos relativos con respecto al proyecto neoliberal). No se trata del llamado proyecto “nacional y popular” conducido por el bloque conformado por la pequeña y mediana burguesía nacional (pequeña y mediana empresa nacional-regional organizada) en alianza con las fuerzas del “trabajo”, articulados en el Estado.

Para analizar el rol de las organizaciones en donde se expresan y articulan las distintas fracciones del “campo popular”, es necesario suprimir un prejuicio corriente por el cual se cree que dichos sectores establecen alianzas con las fracciones “débiles” de la clase dominante solamente debido a la cooptación o por error y engaño, es decir, por “creer” ingenuamente en el discurso de ciertos actores políticos, por aceptar prebendas, por cooptación, por falta de “conciencia”. Si bien no son opciones a descartar, tampoco explican en su totalidad estos procesos, ni muchos menos, y en menos aún son útiles para dar cuenta del proceso que del 2001 y su devenir.

Las distintas organizaciones del campo popular comienzan un proceso de resistencia creciente desde mediados de los años 90'-coincidentemente con el comienzo de la

discusión sobre el “modelo” posterior a la crisis mexicana del Tequila- cuyo eje fundamental pasa por enfrentar el avance del proyecto financiero agroexportador neoliberal, con el objetivo de no continuar perdiendo terreno político-social que se traduce en el constante empeoramiento de las condiciones de vida. En este sentido, la estrategia es defensiva.

Como resulta lógico, este proceso parte desde un punto de fragmentación total y con niveles de organización muy bajos. El movimiento obrero se encuentra dividido en tres centrales: la CGT (Confederación General del Trabajo) oficial conducida por los llamados “gordos”, la CGT disidente conducida por el MTA (Movimiento de los Trabajadores Argentinos) y la CTA (Central de los Trabajadores Argentinos) cuya ruptura con la CGT data de los comienzos del Menemismo.

Los Trabajadores desocupados se encuentran organizados mayoritariamente en la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), ligada a la CTA; la Corriente Clasista y Combativa (CCC) del Partido Comunista Revolucionario (PCR); la Coordinadora Aníbal Verón de orientación predominantemente autonomista, aunque compuesta por múltiples fracciones, con muchas ascendientes del peronismo de base y del cristianismo popular (tercermundismo, teología de la liberación, etc.); y en menor medida se encuentran el MTL (PC), el Polo Obrero (PO), Barrios de Pie (Patria Libre), etc.

En el caso del movimiento estudiantil la situación resulta compleja ya que durante los 90’ y para el año 2001 la presidencia de la federación nacional que lo nuclea, la Federación Universitaria Argentina (FUA), se encuentra conducida por el radicalismo (UCR) en sus dos fracciones: el alfonsinismo, de matiz socialdemócrata, y el sector más cercano a De la Rúa. Junto con la UCR, articula en la conducción el Movimiento Nacional Reformista (MNR) perteneciente al partido socialista y los sectores del PJ vinculados al menemismo. En oposición se encuentra el Espacio Nacional Independiente (ENI), en donde convergen diversos agrupamientos; diferentes sectores del peronismo; organizaciones pertenecientes a los múltiples partidos políticos de izquierda (PC, PCR, PO, MST, Quebracho, etc.).

Si a los sectores mencionados anteriormente, le sumamos todas las expresiones de pequeña y mediana burguesía agraria e industrial, algunas de las cuales nombramos anteriormente (y excluimos las excepciones de la CGT oficial y la conducción de la Federación Universitaria Argentina) podemos afirmar que bajo distintas formas y estrategias las organizaciones que articulan los distintos frentes de masas convergen, con mayor o menor grado de coordinación, e incluso de oposición, en tener al proyecto financiero agroexportador neoliberal como su enemigo principal. Es decir, que todos los sectores populares y la conducción del Movimiento Productivo Nacional, junto con su aliado estratégico, la burguesía paulista, socavan las bases de sustentación y erosionan el modelo del Consenso de Washington. Por lo tanto, en la práctica actúan como aliados, aunque posean programas, objetivos y proyectos diferentes.

Sin embargo, las organizaciones del campo del pueblo no son en cuanto tales las protagonistas centrales de las jornadas del 19 y 20 de diciembre, aunque es innegable la participación de militantes de distintos espacios en dicho estallido. No existe el desarrollo “subjetivo” necesario para hacer de una situación de crisis hegemónica, de un momento de efervescencia social, de un estado de politización creciente, de un proceso de movilización en ascenso, una insurrección popular para emerger como fuerza dominante en el estado. Con ello no queremos quitar del análisis el elemento “espontáneo” de movilización de sectores medios en un clima de malestar social generalizado, además de la presencia poco numerosa de algunas organizaciones políticas partidarias el día 20 de diciembre, y la participación aislada y desorganizada de militantes de algunas organizaciones, lo cierto es

que, predominantemente.

La crisis de legitimidad del régimen y la crisis del sistema político-institucional que se traducían socialmente en el “que se vayan todos”, discurso que encerraba a la vez un hastío y una impotencia bajo las formas comunes de la paralización que el neoliberalismo sedimentó machacando contra la acción política en general, fue capitalizada por quienes sí se encontraban organizados, con un proyecto a desarrollar y esperando la oportunidad para acceder al control institucional del país. Ni el movimiento obrero organizado, que representaba a la mayor parte de la organización de las clases subordinadas, ni ninguna organización de desocupados que constituían el sector más visible y dinámico de las luchas o del movimiento estudiantil fuertemente movilizado por la política de ajuste que incluía la intención de arancelar el sistema público de educación superior, fue partícipe orgánico de dichas jornadas para hacer del estallido una insurrección popular, es decir, en golpe y levantamiento de los excluidos del régimen para imponerse como fuerza en el estado.

El estado de sitio decretado por De la Rúa para frenar la ola de saqueos y focos de enfrentamiento no tuvo otro papel que ser el elemento disparador para que el proceso de desestabilización deviniese en estallido social, y para que finalmente su gobierno reciba un golpe definitivo, que cambió determinadamente las relaciones de fuerzas en el estado a favor del “grupo productivo”. Situación que terminará de traducirse institucionalmente — luego de varios intentos de distintas fuerzas por ocupar el sillón de Rivadavia— con la asunción de Duhalde a la presidencia del país el 1 de enero de 2002 bajo las consignas (que se transformaron en medidas): Devaluación, Pesificación, MERCOSUR y “Compre Nacional”.

Del Duhaldismo al Kirchnerismo: las elecciones de 2005

Con el triunfo electoral del Duhaldismo en el 2003 se consolida institucionalmente el “Grupo Productivo”, es decir, que se legitima electoralmente para desplegar su proyecto. Su candidato era Néstor Kirchner, quien aparecía como ala izquierda del “proyecto productivo” aunque sin fuerza propia, había clamado por el adelantamiento de las elecciones y se había opuesto al gobierno de Duhalde por su falta de determinación para enfrentarse con el FMI. Con la derrota electoral “tácita” de la alianza dolarizadora (ya que su candidato, Carlos Menem, renuncia a la segunda vuelta electoral), mejoran las correlaciones de fuerzas para consolidar:

a- El proceso de **integración regional bajo el Mercosur**, que incluye los intentos por firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

b- La **devaluación del peso** como forma de ganar competitividad en el mercado internacional favoreciendo las exportaciones; como mecanismo de tracción para una relativa re-industrialización por sustitución de importaciones; como forma de producir una impresionante merma en los salarios de los trabajadores medidos en dólares para también ganar en competitividad interna y externa frente a las mercancías de otros países y aumentar la plusvalía relativa del capital⁸; y como medio para tener una fuerte ganancia patrimonial en pesos debido a que los grupos económicos locales que vendieron sus activos a empresas extranjeras tenía ese dinero en dólares en el exterior;

c- La pesificación de la economía como forma elemental de tener relativa independencia monetaria y, por lo tanto, de independencia político-económica.

d- El congelamiento de tarifas de servicios públicos y de la energía, favoreciendo la competitividad y las ganancias relativas de los sectores productivos.

Esta estrategia no excluye determinadamente a las fuerzas el bloque neoliberal financiero transnacional, aunque sí permite existir, acumular y desarrollarse al bloque del “grupo

productivo”, que ante el avance de la etapa superior de la convertibilidad –la dolarización, la profundización del libre comercio y la integración regional-global subordinada— hubiesen aumentado sus pérdidas.⁹ Por su debilidad en el terreno “puro” de la economía, este sector necesita apoyarse, incluir subordinadamente y favorecer el desarrollo relativo y acotado de las fracciones que conforman el llamado “campo del pueblo”: pequeños y medianos empresarios urbanos y rurales, y trabajadores ocupados y desocupados profesionales, técnicos y operarios. Es por eso que, por ejemplo, a partir de 2002-2003 la CGT comienza a tener un mayor grado de representación política-institucional, manifestado en el control de la central sindical del Ministerio de Trabajo y las importantes posiciones ocupadas en el Ministerio de Planificación Federal (donde comparte espacios junto con sectores industriales locales).

Este ministerio, conducido desde sus comienzos en el año 2003 por Julio de Vido, constituye un espacio central del Kirchnerismo desde el cual construir poder propio. En primer lugar, porque le quita poder al Ministerio de Economía, en manos de Roberto Lavagna, quien era la principal figura del Duhaldismo-Alfonsinismo en el gobierno y hombre fuerte del entramado de fracciones que componen el “Grupo Productivo”. En segundo lugar, constituye una importantísima herramienta de construcción, articulación y relacionamiento político a través de la obra pública con los gobernadores e intendentes, así como también con el movimiento obrero organizado, especialmente en el área de transporte. En tercer lugar, le permite inyectar mucho dinero en la economía interna por la obra pública, constituyendo a su vez una herramienta de inversión para dinamizar la economía¹⁰ y favorecer el desarrollo de grupos económicos locales, aliados tácticos, y de pequeñas y medianas empresas nacionales. En cuarto lugar, le permite una interferencia y control estatal de la economía cada vez más acentuada¹¹, no sólo con el control de tarifas, direccionamiento de inversiones y subsidios en determinadas ramas que dan competitividad a la producción local (como por ejemplo el bajo costo relativo de la energía), sino también el avance directo en ciertas empresas a través de la estatización, desarrollo de empresas estatales sobrevivientes (Astilleros, Energía Nuclear) o a través del pasaje de manos extranjeras a manos locales.¹²

El otro lugar fuerte en el cual se asienta institucionalmente el núcleo del kirchnerismo y desde el cual teje y desarrolla fuerza propia, es el Ministerio de Desarrollo Social, al frente del cual se ubica Alicia Kirchner. Desde aquí, junto con la secretaría general de la presidencia a cargo de Oscar Parrilli, se coordina y potencia la construcción con distintos movimientos sociales, especialmente de desocupados y barriales, como es el caso de Barrios de Pie (Patria Libre), Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Movimiento Evita y otros más chicos. El Ministerio de Trabajo, a través del cual empieza a ver satisfechas sus demandas el movimiento obrero organizado, es el otro pilar desde el cual se expresará la alianza de clases que dará forma al llamado Kirchnerismo. Por último, la política de derechos humanos, con la cual incorpora al sistema político-institucional una de las demandas centrales de los actores que resistieron al proyecto neoliberal a partir de la dictadura de 1976, y con ello a un conjunto de organizaciones de Derechos Humanos, como también del llamado campo popular en general.

El “kirchnerismo” como emergente no constituye un proceso lineal de una fuerza política-social que surge como identidad a partir de la crisis orgánica que vive la Argentina, avanzando sobre el estado (o mejor dicho, el sistema político institucional), sino que se despliega en un sentido más complejo: desde el sistema político-institucional, al cual llega a partir de la “fuerza de otros”, el llamado kirchnerismo pasa a expresar en el estado a un conjunto de intereses subordinados e incluso excluidos, dando forma a una fuerza propia. Un ejemplo claro en esto lo constituye la política de derechos humanos mencionada anteriormente: es a partir de dicha política, retomando reivindicaciones de las

organizaciones de derechos humanos y sectores populares que venían de muchos años, el llamado kirchnerismo se construye a sí mismo incorporando en mayor o menor medida a dichos actores. Pero tampoco puede decirse que sólo es un proceso desde arriba, ya que eso sería una negación de los cambios en la relación de fuerzas a favor del grupo productivo como de los distintos sectores del campo popular, que con claridad se observa a partir del 2001.

Las elecciones legislativas de 2005 ponen de manifiesto la agudización de las contradicciones al interior del propio gobierno, especialmente en lo que se refiere al lineamiento dominante dentro del mismo ya que coexisten una multiplicidad de intereses. La batalla por la provincia de Buenos Aires entre el Duhaldismo y el Kirchnerismo significa para este último el pasaje de su “prehistoria a la historia”, en donde lo que está en juego se trasluce con mayor notoriedad en el enfrentamiento entre Lavagna y Kirchner en torno a medidas fundamentales de gobierno.

Los principales puntos en discusión en la interna de gobierno eran los siguientes: aumento de salarios, inflación, gasto público, el ingreso de Venezuela al Mercosur y su alianza estratégica con la Argentina, y el ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas).¹³

En primer lugar Lavagna —al igual que la socialdemocracia brasilera, la cúpula de la burguesía paulista (especialmente de la Federación de Industriales de San Pablo) y el gran parte del Grupo Productivo— se oponía al ingreso de Venezuela como socio pleno al Mercosur y el avance hacia un bloque de poder suramericano más sólido, es decir, el Mercosur “político” como plataforma de un bloque estratégico suramericano desde el cual posicionarse con otra relación de fuerzas a nivel global. En palabras de Lavagna *“es bueno que la patota quede afuera del Mercosur... (el bloque) debe preservar su perfil democrático y con economías de mercado. Un cierto alejamiento de Uruguay y el ingreso pleno de Venezuela altera estos dos elementos”*.¹⁴ En esta misma línea, el ministro de economía manifestaba la postura dominante en el Grupo Productivo y en la Asociación Empresaria Argentina (aunque no única) de negociar el ALCA como Mercosur (proceso 4+1) pero no descartar de plano el ALCA ni agudizar el enfrentamiento con los EEUU más allá de una negociación, especialmente en lo referente a la cuestión agrícola.¹⁵

Por otro lado, la cuestión salarial va a revestir tremenda importancia en lo que, superficialmente, va a llamarse la pelea entre el kirchnerismo vs Lavagna-Duhalde. El disparador central fue el enfrentamiento entre la CGT (a partir de la asunción de Hugo Moyano del sindicato de Camioneros y referente del MTA, al frente de central) y el ministro de economía, el cual, como mediación política-institucional, se acercaba a las posiciones expresadas por la mayor parte de los empresarios del “grupo productivo”, para los cuales los aumentos de salarios eran inflacionarios. Con la economía en crecimiento, la tasa de desempleo disminuyendo y la mayor influencia del movimiento obrero organizado dentro de la alianza de gobierno —con sus distintos matices, gradaciones y contradicciones— la lucha por la recuperación salarial y la distribución de la riqueza vuelve a ocupar un lugar central en la discusión político-económica, especialmente si se tiene en cuenta el impresionante aumento de la productividad por trabajador y el grado de explotación de la fuerza de trabajo luego de la crisis, la recesión y la devaluación.

A partir de su asunción al frente de la CGT a principios de julio de 2005, Hugo Moyano encolumnó la central obrera en apoyo al Kirchnerismo y a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires en medio de la pelea con el duhaldismo, golpeando contra Lavagna y su política salarial: *“algún funcionario tiene que entender que es mentira que los salarios producen inflación... (quienes la provocan) son los formadores de precios.”*¹⁶ Estas declaraciones, que fueron respaldadas por varios

integrantes y voceros del kirchnerismo,¹⁷ ponían de manifiesto la creciente ruptura al interior del gobierno. En contraposición, los llamados “gordos” de la CGT (principalmente Luz y Fuerza, Comercio, Alimentación y Sanidad) que quedaron subordinados en la conducción de la central, comenzaron a trabajar junto con Eduardo Duhalde para una posible candidatura presidencial de Roberto Lavagna.¹⁸

El pensamiento de Lavagna, desde la mirada del capital concentrado, es en alguna medida cierto. Es decir, el aumento de salarios es inflacionario ya que el aumento de precios es la forma en que los empresarios anulan la distribución de riqueza a favor de los trabajadores que implica el aumento de salarios. Desde esta lógica se entiende el fuerte rechazo del ministro de economía por el aumento de \$60 en dos cuotas a los porteros de edificios, causante según su visión de gran parte de la inflación de junio de 2005.¹⁹ En realidad, lo que está en juego con la cuestión inflacionaria es la puja distributiva. De hecho, cada vez que en la historia Argentina cambiaron las correlaciones de fuerza a favor de los sectores populares, traduciéndose en avances en la apropiación de la riqueza por parte de los mismos, hubo fuertes “presiones” inflacionarias. Y por ello, la respuesta al problema de la inflación desde los sectores populares siempre fue el control de precios y la intervención creciente del estado sobre la economía para controlar al capital concentrado, mientras que del otro lado la respuesta casi siempre fue reducir el gasto público (mecanismo indirecto de redistribución de riqueza), congelar salarios y “enfriar la economía”.

Para mediados de 2005 lo que comienza a observarse son los límites mismos del proyecto productivo, el creciente enfrentamiento al interior de la coalición de clases en que se sustentaba y la puja por definir el rumbo dominante de la política de gobierno, para lo cual se va a configurar un nuevo bloque de fuerzas. Este nuevo bloque también contendrá a una fracción de la clase dominante, que a su vez es parte del grupo productivo, pero que por sus características en cuanto a la escala de su capital, su composición orgánica y el tipo de valores de uso que producen —especialmente esto último—, necesitan mayor intervención estatal, inversión estatal y proteccionismo, y mayor desarrollo relativo del mercado interno y del proceso de integración regional. Esta fracción constituye el grupo industrialista dentro de la Unión Industrial Argentina (UIA) que está comandada por el grupo Techint y expresa al sector industrialista del “grupo productivo” ligado a la producción de bienes intermedios (acero, aluminio, petróleo, etc.) y bienes de capital (maquinaria). De hecho, al grupo Techint le era de gran utilidad la entrada de Venezuela al Mercosur por ser uno de los mayores inversores en dicho país, contando con la principal siderúrgica, SIDOR. Y, por otra parte, muchas de las empresas metalúrgicas nucleadas en ADIMRA (pequeñas y medianas metalúrgicas) comenzarán a vender maquinaria a Venezuela por la política de desarrollo industrial de dicho país, aumentando fuertemente su posibilidad de acumulación ampliada (acotada hasta ese momento, fundamentalmente, al territorio nacional)

Con el triunfo del Kirchnerismo en las elecciones legislativas de 2005 se fortalece, en parte, una política desarrollista, industrialista, de ampliación relativa del mercado interno, proteccionista, con mayor presencia del Estado (control de precios, estatizaciones, etc.), de desarrollo regional y conformación de un bloque suramericano de poder. En este escenario empieza a aparecer con mayor fuerza, aunque subordinado en la fuerza social en función de gobierno, el proyecto denominado históricamente “Nacional-Popular-Latinoamericano”, sostenido en los pilares del Estado, la Producción y el Trabajo.²⁰ Se trata de un bloque de fuerzas que contiene en su interior la contradicción entre el desarrollismo industrialista más “proteccionista” y “estatista” (en términos relativos) que aparece como dominante y, por otro lado, la clásica alianza nacional-popular compuesta por los trabajadores, la pequeña y mediana burguesía nacional y las empresas estatales estratégicas que puján fuertemente por el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales y latinoamericanas, por la

distribución de la riqueza, la desconcentración de la economía y la recuperación de lo público como herramienta central para la inclusión universal.

A partir del resultado de octubre de 2005, el enfrentamiento entre el “duhaldismo” y el “kirchnerismo” se salda a favor de este último en la resultante de las correlaciones de fuerzas en el estado, mientras que el primero queda subordinado aunque incluido ya que el modelo le sigue siendo favorable a pesar de los cambios. Esto se cristalizará en las resoluciones finales sobre los puntos en discusión mencionados anteriormente y encarnados en la figura de Lavagna.

La Cumbre de las Américas de Mar del Plata, realizada días después de las elecciones, constituye un hecho síntesis en cuanto al alineamiento, posicionamiento y medición de fuerzas en el continente americano, forzado por la propia administración Bush a partir de la insistencia en avanzar con el ALCA. Esto se debe a que el escenario internacional de creciente multipolarismo obliga al gobierno republicano a fortalecerse en su “patio trasero”, especialmente en momentos donde emergen fuerzas y se desarrollan procesos mundiales contrarios a sus intereses.

La Cumbre de las Américas obliga a los 34 países del continente a posicionarse con respecto a los proyectos estratégicos en pugna, limitando toda táctica de diferir el enfrentamiento así como también imposibilitando las posturas intermedias como las expresadas por el Ministro de economía Roberto Lavagna en Argentina o incluso por parte de países del Mercosur, como en el caso de Paraguay y Uruguay. Esto divide asimétricamente a toda América en dos grandes polos, mostrando cuantos países se encuentran de cada lado del enfrentamiento y haciendo visible la relación de fuerzas entre los dos proyectos estratégicos. De esta manera, el gobierno de los Estados Unidos logra forzar a que la mitad de los países suramericanos (y casi todo el resto de Latinoamérica) se posicionen del lado del ALCA, quedando sólo cuatro países —Argentina, Brasil, Venezuela y Cuba, que estaba excluida de la cumbre— en una clara posición contraria.

En este escenario, el eslabón clave a presionar por los EEUU era la Argentina, que del eje Argentina-Brasil-Venezuela-Cuba presentaba mayor debilidad en términos político-sociales. *“Si mejoramos nuestra relación con la Argentina, metemos presión a los brasileños y reducimos el margen de maniobra de Venezuela”*.²¹ Es decir, si cambiaba el escenario en la Argentina se podía avanzar con mayor facilidad hacia el ALCA. Por ello las presiones se centran sobre la Argentina y, por otro lado, en paralelo a las negociaciones por el ALCA como acuerdo global a nivel continental, el gobierno de EEUU avanzaba cerrando Tratados de Libre Comercio (TLC) bilaterales con Chile, Perú, Ecuador y países de Centroamérica y el Caribe. Incluso, el gobierno de los Estados Unidos firmó durante la Cumbre de las Américas un acuerdo para avanzar con un TLC “light” con Uruguay, produciendo un quiebre al interior del MERCOSUR.

La respuesta del eje Brasil-Argentina-Venezuela-Cuba, fue hacer de la Cumbre de las Américas una instancia de rechazo a la política de Estados Unidos en el continente: deslegitimar los acuerdos de libre comercio en condiciones asimétricas, fortalecer la instancia del Mercosur-integración suramericana como bloque regional con masa crítica de poder suficiente desde donde desarrollar un proyecto autónomo, y elevar la relevancia y convocatoria de la Cumbre de los Pueblos organizada en paralelo a la Cumbre de las Américas, desde donde se lanzaron furibundas críticas al “imperialismo” y se debatieron los ejes estratégicos del proyecto de integración de los pueblos latinoamericanos. De esta manera, el eje Argentina-Brasil-Venezuela-Cuba profundizó los discursos para deslegitimar al ALCA como proyecto “imperialista” o (según quien se exprese) como proyecto desfavorable para los intereses Latinoamericanos, e intentó sumar fuerza moral

(legitimidad, conducción y convicción) al posicionarse como oposición, como alternativa de integración regional autónoma.

La presión de Bush obligó a potenciar y acelerar el desarrollo de la construcción de la integración regional. En este sentido, a los días de terminada la cumbre, Kirchner viajaba a Venezuela y se aceleraban las gestiones para cerrar acuerdos estratégicos fundamentales: la venta de un reactor nuclear de la Argentina a Venezuela como parte de la estrategia de desarrollo sur-sur de las empresas estatales estratégicas (como también los acuerdos con Astillero Río Santiago para la construcción en Argentina de buques de gran porte para Venezuela), la compra de bonos de la deuda argentina por Venezuela para ganar en grados de autonomía en el financiamiento regional, el pago del total la deuda al FMI coordinado con Brasil en la Cumbre del Mercosur, los avances en la construcción del llamado anillo energético que implicó el acuerdo para que la empresa argentina estatal de energía creada recientemente –ENARSA– se adjudicara áreas de explotación hidrocarburíferas en la faja del Orinoco, entre otras medidas de cooperación.

El cambio de las relaciones de fuerza que se produjo a partir de las elecciones de octubre, la Cumbre de las Américas, la Cumbre del Orinoco y del MERCOSUR, que impactaron en la política salarial, productiva, internacional y financiera, provocó un cambio necesario en las mediaciones políticas, que se traduce en una reestructuración del gabinete. La negativa de Lavagna y del duhaldismo en general a disciplinarse a la nueva situación conduce a la renuncia del ministro de economía, a lo que le sigue el aumento de la presión inflacionaria por parte de los sectores concentrados de la economía. En su lugar asume Felisa Miceli, proveniente del Banco Nación, Nilda Garré asume en defensa y Jorge Taiana como ministro de relaciones exteriores. En resumen, el “kirchnerismo” (o lo que definimos específicamente como tal) pasa a ser dominante en el gobierno –aunque no en el estado— y emerge como tal, pero acotado por las alianzas tácticas y por la debilidad de la construcción político-social. La resultante en términos político-económicos es la profundización de lo que denominamos como desarrollismo industrialista-proteccionista con crecientes grados de intervención estatal.

El periódico estadounidense *The New York Times*, es bastante claro para diagnosticar los cambios que se suscitaron en la Argentina, especialmente a partir de las elecciones: “...el pago de 9.800 millones de dólares es un hecho simbólico importante y una señal más de que el presidente Néstor Kirchner parece estar concentrando más poder en sus manos e inclinando el gobierno hacia la izquierda. Desde una victoria electoral en octubre, Kirchner avanzó para establecer una alianza con el líder populista de Venezuela, Hugo Chávez, y para extender el control estatal en la economía, el poder judicial y los medios de comunicación ... se asoma la amenaza antiinflacionaria y Kirchner respondió de una manera estatista, intentando imponer controles de precios a ciertos productos esenciales... Chávez ya compró más de 1.000 millones de dólares en bonos y podría comprar otros 2.000 millones más. Eso, más las fuertes exportaciones, le dieron a Kirchner el margen que necesita para cancelar las obligaciones con el FMI y postergar futuras negociaciones sobre cuestiones como política monetaria y tarifas de servicios públicos.”²²

El conflicto del agro y la agudización de las contradicciones

La supuesta estabilidad institucional dada por el contexto de crecimiento general puso un velo sobre la profundización de la crisis de hegemonía y la agudización de las contradicciones que estallarían con el llamado “paro agrario” o “crisis del campo”. Si la hegemonía de un proyecto estratégico que lleva adelante sobre el conjunto de la sociedad

supone que tanto en lo económico, en lo político y en lo estratégico (ideológico-cultural) se imponga predominantemente un proyecto de sociedad, que tenga legitimidad y consenso (como ocurrió con el neoliberalismo a principio de los años 90'), desde nuestro punto de vista, el proceso que analizamos dista absolutamente de ser un reacomodamiento de las clases dominantes, un simple cambio de posiciones o ciertas concesiones a los sectores populares para que nada cambie.

En primer lugar, porque lo dominante en el plano económico no es lo dominante en el plano político. No existe unidad en el estado entre economía, política y estrategia. En el plano de la economía es dominante el capital concentrado multinacional y transnacional, y el modelo neoliberal es dominante en esta órbita aunque coexistiendo con el progresivo desarrollo de un tejido productivo e industrial²³ nacional impulsado por la sustitución de importaciones y la intervención del estado ya sea para beneficiar directa o indirectamente a estos sectores, como a través de procesos de estatización. Pero en el plano de la política, tanto del sistema político-institucional como político-social, y en el plano de las "ideas", el modelo neoliberal ya no es dominante y menos aun hegemónico, según lo expuesto más arriba.

Esto se refleja en el gobierno del estado, en donde dentro del llamado kirchnerismo existen dos grandes fracciones: el "albertismo" o el conjunto de cuadros que tienen como vértice al jefe de gabinete Alberto Fernández y, por otro lado, los "pingüinos", el "devidismo" (por el Ministro de Planificación Julio De Vido) o el kirchnerismo puro ya descrito anteriormente.

Qué expresa Alberto Fernández en la Jefatura de Gabinete. Este hombre proveniente del equipo de Domingo Cavallo y al que respondía casi la mitad del gabinete nacional, es el canal por el cual influyen en el gobierno del estado los intereses económicos concentrados. Dicho de forma esquemática y como hipótesis de trabajo, se acerca bastante a lo que podemos denominar como "progresismo financiero" o de "mercado", resumido a nivel teórico en la figura del sociólogo inglés Antony Giddens con su propuesta de la "Tercera Vía"²⁴, que es una "síntesis" entre neoliberalismo y ciertos componentes socialdemócratas, expresado en términos políticos prácticos por el laborismo británico y el partido demócrata de los Estados Unidos. El progresismo financiero constituye el reformismo al interior de la globalización hecha a imagen y semejanza de las redes financieras²⁵ transnacionales. Es el no cuestionamiento de la estructura económico-social en su conjunto, de la llamada "economía de mercado" (en realidad debería decir economía global financiera neoliberal), pero que introduce ciertas reformas político-sociales dentro de dichos límites: ejes como el ecologismo, el feminismo, la seguridad social, los derechos humanos, la pobreza son tomados desde una perspectiva particular para introducir reformas e incorporar a los sectores socialmente subordinados, sin que ello implique un enfrentamiento o modificación estructural al dominio del capital financiero transnacional.²⁶

De hecho, los impedimentos a las transformaciones estructurales contrarias al modelo financiero agroalimentario-exportador en sus distintas versiones provenían de este sector al interior del gobierno. Los intentos de re-estatización de Aerolíneas Argentinas, de re-estatización del sistema jubilatorio, la discusión entre argentinización y reestatización (al menos parcial) de YPF bajo una alianza entre ENARSA y PDVSA (Venezuela)²⁷ y la intención de avanzar con una nueva ley de servicios audiovisuales afectando los intereses de los grandes grupos de multimedios, entre otras cosas, así como la profundización de los acuerdos e integración con los países de la región que conforman la línea del mal para Washington, especialmente Venezuela, eran frenados y discutidos por los que se denominaba al interior del gobierno el "Albertismo".

En esta interna entre lo que simplifadamente se vislumbraba como el “estatismo” y el “progresismo”, tanto Julio De Vido como Alberto Fernández actúan como cuadros políticos, articulando un conjunto de intereses y expresando a distintas fracciones y grupos de poder, que se encuentra en determinado orden de conducción, expresando como dominante determinado proyecto estratégico. Constituyen la representación posible en un escenario de máxima crisis de los partidos políticos y de los cuadros políticos, articulando actores políticos gremiales y estratégicos.

Estos dos grandes sectores en que se divide el gobierno del estado son la forma que toma la representación política en el periodo de crisis del sistema de representación, que se agudiza con a medida que se fortalece el proceso de transformación. Estos espacios que aglutinan y contienen a fracciones del pueblo argentino son conducidos en sus cúspides, en términos dominante, por fracciones de capital, aunque muy diferentes y con intereses contrapuestos en términos de “modelos” de capitalismo. Es esto lo que nos permite ver en que momento que se encontraba la Argentina antes del conflicto por el control de la renta agraria, en tanto sectores del capital son los que tienen todavía la iniciativa en las reformas que se van desarrollando, pero que en su disputa deben incluir y, por lo tanto, ceder y negociar, con los sectores del campo del pueblo, los cuales a su vez encuentran espacios al interior de este conjunto de fuerzas para desarrollar, al menos parcialmente, sus objetivos, como por ejemplo se puede observar con la política de derechos humanos y la política laboral, entre otras.

La profundización de la crisis de los cuadros políticos, que ya no expresan las fracciones sociales que antes representaban, seguida de la crisis de los partidos políticos, que ya no representan ni vertebran a las mayorías organizadas en policlasismos aunque sigan siendo los principales instrumentos electorales, deviene en la Argentina actual en crisis del sistema político-institucional en su conjunto.

Argentina se encuentra, antes de que se desate el enfrentamiento por la apropiación de la renta agropecuaria, en un momento de crisis en el sistema político institucional, es decir, en el momento más alto de la crisis de representación política, que expresa la incapacidad de ciertos bloques de poder en disputa de imponerse como dominantes, conteniendo y mediando a otros. Crisis que transcurre en términos estructurales y orgánicos aunque no superficiales —lo cual da una apariencia de estabilidad que no expresa otra cosa que un estado de empate, progresivo para los intereses populares—, ya que los sectores para los cuales el kirchnerismo empezaba a transitar una peligrosa senda de “estatismo” y “populismo”, según sus propias palabras, no logran construir y vertebrar la fuerza político social para iniciar la contraofensiva conservadora. Tampoco cuentan con las fuerzas partidarias para ello, puestas en crisis por el propio vaciamiento neoliberal que los dejó reducidos a partidos de comercialización de candidatos y la transformación de estructura social que produjo la imposición del capital financiero transnacional como forma dominante de organizar la producción.²⁸

Esta crisis se vive en el conjunto de Latinoamérica y significa un proceso de transición de un viejo orden social hacia un nuevo orden social, o hacia la restauración del viejo orden social bajo otras formas. La crisis recorre el camino de la transición hacia algo distinto, en términos de nuevas alianzas de clases que sostienen determinados proyectos estratégicos, es decir, determinadas formas de vida. Por lo tanto es importante comprender hacia donde y que caminos puede recorrer esta transición. Lo que entró en crisis Latinoamérica es el Proyecto Estratégico del Capital Financiero Transnacional, con el conjunto de instituciones que mediaban las relaciones sociales impuestas por este proyecto, de acuerdo al estado de correlación de fuerzas en que se encontraba en cada país en particular.

Esta crisis, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer, si sigue su transición transformadora ascendente (desde el punto de vista popular) da paso hacia la conformación del “Movimiento Nacional, Popular y Latinoamericano” en tanto voluntad colectiva que organiza y rearticula la fuerza del “campo del Pueblo”, o puede devenir, si sigue el curso contrario, hacia la restauración (con ciertos cambios) del proyecto estratégico neoliberal y de las viejas formas de organizar la representación política. Eso es lo que está en juego de forma completamente explícita en la Argentina durante el llamado “conflicto del campo” (frase que está lejos de significar el verdadero enfrentamiento): el estallido, la puesta en escena del proceso de agudización de las contradicciones que se venía gestando pero que estaba contenido al estar todos los intereses expresados, en mayor o menos medida, algunos con mayor poder y otros con menos, al interior del sistema político-institucional.

Hasta marzo del 2008, con la crisis financiera internacional en proceso aunque sin haber estallado con toda su fuerza, en un contexto de impresionante crecimiento económico, casi todas las fracciones crecen o se ven beneficiadas, al menos parcialmente, y pueden plasmar en políticas de estado sus intereses, mientras el gobierno indica la resultante, que se orienta hacia lo que denominamos Unión Suramericana-desarrollo industrial nacional y regional. Esto no hace más que agudizar en forma creciente la disputa entre proyectos estratégicos, es decir, la disputa al interior del estado. La concentración de la tierra y la transnacionalización de los agro-negocios continua, aunque las retenciones mengüen en parte las hiper-ganancias del sector. La explotación minera mantiene el régimen de entrega de los 90' por el cual las grandes transnacionales succionan el suelo del país sin siquiera pagar retenciones en un contexto de aumento impresionante del precio de los commodities. Y no se da la re-estatización de la petrolera Repsol-YPF que es el medio fundamental para recuperar la política energética nacional orientada al desarrollo endógeno, aunque la política de retenciones permita captar gran parte de la renta petrolera para el estado nacional y disminuir los precios locales. Pero, por otro lado, los intereses que estaban excluidos, como los de las pymes o los de la clase trabajadora ahora también son parte del sistema político institucional y pueden desarrollar las políticas vinculadas al proyecto industrialista de desarrollo regional y pleno empleo.

El plan de las retenciones móviles: La “125”

El plan de aplicar retenciones móviles sobre los principales productos agrarios de exportación (soja, trigo, maíz y girasol), conocido como la “resolución 125”, se da en una situación de crecimiento extraordinario de los precios internacionales de dichos productos que forma parte del crecimiento extraordinario de los precios de los commodities. En los seis meses que van de agosto de 2007 a enero de 2008, poco antes de que estallara el paro agrario, el precio de la soja aumentó nada menos que un 68%, el girasol un 91%, el maíz un 39% y el trigo un 38%.²⁹ Esto se da por múltiples causas, entre las cuales se destacan: la formación de una burbuja en los precios globales de los commodities producto de la especulación financiera; el notable crecimiento de la demanda de dichos productos por el crecimiento de la demanda global de alimentos, especialmente desde China e India; el aumento de la demanda para la utilización en la producción de bio-combustibles.

Cómo se ve, el aumento de precios no corresponde a un esfuerzo extraordinario de los productores argentinos sino a causas internacionales. El enfrentamiento es, entonces, en torno a quién se apropia de esta renta extraordinaria producida en tierras de rendimiento extraordinario en términos relativos.³⁰ Lo que definimos como kirchnerismo al interior del gobierno o el núcleo industrialista “nacional-popular”, impulsa la implementación de las retenciones móviles, para que dichos impuestos a la exportación aumenten o disminuyan

al mismo ritmo de los precios internacionales, aumentando los recursos que ingresan al estado en caso de un aumento extraordinario de precios internacionales. Pero por otro lado, sigue resignando la política agropecuaria a los sectores financieros-agroalimentarios-exportadores cuyo núcleo lo constituyen: las grandes transnacionales del agro con sus bancas y fondos de inversión, los grupos económicos locales agroalimentarios y los grandes propietarios. Los protagonistas principales de este núcleo son: Cargill, Monsanto (FMR Corp. 9,8%), Bunge y Born (Wellington Management Co. 9,4%), Dreyfus, Nidera, Noble, Vicentín, Bemberg, Sociedad Rural Argentina, COPAL (Cordinadora de las industrias de Productos Alimenticios), Kraft (perteneciente al fondo de inversión norteamericano Berkshire Hathaway de Warren Buffet), Molinos (Pérez Companc), Arcor, Grobocopatel, Aceitera General Deheza (AGD), Grupo Clarín, La Nación, y las familias terratenientes tradicionales como los Gómez Álzaga, los Balcarce, los Heguy, los Santamarina, etc., entre otros. Para los que creen que la oligarquía local ha desaparecido y aceptan dichos discursos tendientes a ocultar la situación objetiva de la estructura económico-social de la Argentina, cabe señalar que sólo 161 propietarios poseen en la Provincia de Buenos Aires 3,8 millones de hectáreas, un 11,3% de la superficie agropecuaria provincial³¹, a lo que habría que sumar lo de las otras provincias. Lo que si es cierto es que se ha diversificado y cambiado de forma.

Por otro lado, los pequeños y medianos productores no pasan a perder dinero a partir de las retenciones móviles, aunque deben resignar gran parte de sus beneficios. Con la primera versión de la resolución 125, de retenciones móviles indiscriminadas, se reproduce el esquema de desigualdades en el sector agrícola. Por otra parte, bajo el esquema de producción-valorización financiera vigente, los pequeños y medianos productores devienen necesariamente en pequeños rentistas que alquilan sus tierras.

Esta situación desencadena una primera lucha gremial nacional de los pequeños y medianos propietarios y los productores, pero que no la dirigen hacia quienes se apropian mayormente y privadamente de la riqueza producida sino que va contra el gobierno del estado para que de marcha atrás con la resolución 125. Por lo tanto, el impulso gremial, instantáneamente se vuelve político-gremial y sobre el mismo comienzan a operar los hilos del poder del núcleo financiero agroalimentario exportador para que este conflicto devenga en político-estratégico, en discusión de modelos de país y de visiones dominantes en función de sus propios intereses, y no se transforme en una lucha que cambie la estructura de la producción agraria argentina. En este sentido, por distintas causas que ahora analizaremos, los pequeños y medianos propietarios (rentistas y productores) de hasta 1000 hectáreas, pasan a estar conducidos y vertebrados por el núcleo de poder financiero agroalimentario exportador, el cual logra por fin, luego de muchos años e intentos varios, tener base social para iniciar una contraofensiva conservadora, a la cual logra sumar a una gran parte de los sectores medios urbanos.

Las estructuras políticas principales para llevar esta maniobra adelante serán las del duhaldismo (con su base en Confederaciones Rurales Argentinas, en algunos gremios de la CGT conducidos por Luis Barrionuevo y en sectores barriales del conurbano bonaerense); la UCR, el nosigilismo y el "alfonsinismo" (con su base en la Federación Agraria y la universidad); la liga de gobernadores y exgobernadores del PJ y la UCR surgidos en el neoliberalismo que rompen con el auto-disciplinamiento en el que se encontraban con respecto al gobierno nacional ante la nueva oportunidad que se les brinda. A estos actores se le suman los partidos como el PRO de Mauricio Macri y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. También se encuentran dentro de los actores políticos del bloque financiero agroalimentario exportador algunos sectores de la llamada "izquierda", principalmente el Partido Comunista Revolucionario y el MST; y otros sectores del "progresismo" alineados al bloque financiero agroalimentario exportador.

La influencia en la conducción estratégica del paro agrario por parte del núcleo financiero-agroexportador parecería ponerse de manifiesto cuando se lleva a cabo la votación en Congreso Nacional de la versión integral y definitiva del proyecto de retenciones móviles. Este proyecto, que aprueba la cámara de diputados pero no la de senadores, dista en gran medida de la primer versión del proyecto de retenciones móviles contenido en la resolución 125 y contiene medidas favorables para los pequeños y medianos productores, tanto arrendatarios como propietarios, y contraria a los intereses de los grandes empresarios del agro. Esta resolución incluye las siguientes medidas centrales:

- 1- La nueva escala para soja y girasol establece que hasta 300 toneladas exportadas recibirían compensaciones para fijar la retención en el 30 por ciento, cinco puntos menos que las que regían al 10 de marzo (día anterior a la salida de la resolución 125); entre 300 y 750 toneladas los reintegros bajarían la alícuota a 35 por ciento, la que regía hasta la resolución 125; mientras que aquellos que exporten hasta 1500 toneladas, también pagarían sólo el 35 por ciento por las primeras 750 toneladas. Es decir, la escala mejora las condiciones de los pequeños y medianos, incluso más que antes de que salga la resolución 125 en su primer formato, y la movilidad de las retenciones pasa a ser segmentada y progresiva.
- 2- Compensaciones al flete de los productores de zonas alejadas a más de 400Km de los puertos, que beneficia fuertemente a los productores de la región extrapampeanas.
- 3- La creación del llamado Fondo de Redistribución Social, conformado por el porcentaje del dinero recaudado por las retenciones que se obtiene cuando las mismas superan el 35% (no afecta por lo tanto a pequeños y medianos, el 85% de los productores). El 50 por ciento de los fondos se destina a la construcción de hospitales, un 20 por ciento para viviendas, otro 20 por ciento para caminos rurales y un 10 por ciento para la agricultura familiar.

La posibilidad de hegemonizar la categoría “campo” y construir sobre esta base la legitimidad de la protesta asentada a través de la imagen del arduo trabajo rural, la apropiación parasitaria del estado sobre los recursos producidos por el campo para darle a los “vagos del conurbano”, el campo como sector que alimenta el país, el campo como motor del desarrollo nacional, el campo como “la patria”, etc., fueron los elementos articulados para construir el eje ideológico campo vs. gobierno, antinomia clave para ganar en el plano de la visión la batalla por la renta extraordinaria del agro. Esta trampa ideológica pone en el enfrentamiento a actores sociales (el campo) vs actores políticos institucionales (el gobierno) ocultando que se trata de un enfrentamiento entre proyectos en el cual en ambos lados existen una multiplicidad de actores económico-sociales, políticos y estratégicos (ideológicos, culturales, intelectuales). La construcción de la imagen “campo” convierte un particular (ciertos sectores de la producción agrícola) en universal, ocultando que una gran parte de los productores rurales, agrupados en movimientos como el MOCASE, el MOCAFOR, el MAM, el MAC y las distintas organizaciones de agricultura familiar, no son parte ni de la “mesa de enlace” ni de la protesta. Por otra parte, la imagen “campo” homogeniza algo que es completamente heterogéneo y antagónico: los pequeños y medianos productores con los grandes propietarios terratenientes, los pooles agrarios, la grandes exportadoras y las transnacionales de la biotecnología, con el fin de subordinar los intereses gremiales de los pequeños y medianos productores a las luchas hegemónicas del bloque financiero agroexportador.

El paro agrario provocó la fractura en el gobierno, que como se mencionaba anteriormente albergaba hasta entonces contradicciones insalvables. Los intereses contenidos en el “albertismo” (como vértice de gobierno, no como expresión de totalidad y menos aun de homogeneidad), especialmente aquellos vinculados directamente con el proyecto

estratégico neoliberal en sus distintas versiones y matices, fracturaron el gobierno con la discusión de la renta extraordinaria del complejo agrario. A estos se le suman un conjunto de actores políticos aliados al gobierno, pertenecientes tanto al Partido Justicialista como a la UCR. Esta fractura mostró de forma objetiva los intereses y los proyectos en pugna. Por otra parte, puso de manifiesto que ya no iban a ser “toleradas” las reformas que dañen sus intereses estratégicos, toda concesión que fortalezca un bloque de poder alternativo, todo avance en el campo de las ideas que legitime los valores del proyecto estratégico del Estado, la Producción y el Trabajo bajo una nueva síntesis “nacional-popular”. Es decir, como señala García Linera (vicepresidente de Bolivia) para el proceso boliviano, se produce un punto de bifurcación donde el empate entre proyectos estratégicos, entre el campo de la transformación democrático-nacional (en donde existen un conjunto muy amplio de intereses y fuerzas) y el campo de la restauración conservadora o también llamado de la contra-revolución (que también es múltiple), debe resolverse hacia algún lado, ya no pueden mediarse y expresarse como tal en el sistema político-institucional y en el gobierno del Estado.

El golpe institucional que significó el voto “no positivo” del vicepresidente de la Argentina Julio Cobos, que desempató en el senado la votación en contra del proyecto de ley de retenciones móviles con el conjunto de reformas mencionadas anteriormente, constituyó la expresión en lo institucional del quiebre producido en lo político-estratégico. Esto estuvo precedido por el golpe de fuerza provocado por la generalización de los cortes de ruta y el desabastecimiento de productos básicos como los alimentos. Sin embargo, lo que parecía un golpe definitivo-estratégico sobre los intereses industrialistas-desarrollistas nacionales y los intereses “nacionales-populares”, terminó siendo un golpe táctico-coyuntural, debido a la decisión de avanzar y profundizar el proceso de transformación en una situación internacional favorable. Es decir, el punto de bifurcación como le llama García Linera³², constituye una situación que ofrece dos salidas ya que la situación de equilibrio anterior ya no es posible: la salida transformadora del viejo orden, que profundiza la crisis orgánica, o la salida de restauración conservadora, donde el antiguo orden vuelve a restaurarse bajo nuevas formas.

Es posible la salida por la profundización del proceso de transformación, en donde se fortalecen las posiciones de las fuerzas “nacionales-populares-latinoamericanas”, por la crisis general, tanto objetiva como subjetiva en que se encuentra el viejo orden: crisis financiera internacional y lucha entre polos de poder mundial, deviniendo en un creciente multipolarismo favorable para los pueblos; crisis de los partidos políticos que no pueden ser utilizados en su totalidad como herramientas efectivas para la restauración; imposibilidad de acuerdo programático por parte de la llamada “oposición” ya que expresan intereses diferentes y proyectos contradictorios, que sólo pueden converger contra su enemigo principal, “el kirchnerismo”, que es la forma simbólica –en la construcción antinómica kirchnerismo vs anti-kirchnerismo— de ocultar el enfrentamiento real y los intereses en juego. Estos elementos son los que en parte explican, al mismo tiempo, por qué la victoria táctica del bloque financiero agroalimentario exportador no se convirtió en una victoria estratégica.

En este sentido, como parte del avance transformador, se entienden el conjunto de medidas que siguen al voto “no positivo” y la salida de Alberto Fernández de la jefatura de gabinete: la re-estatización de Aerolíneas Argentinas; la re-estatización del sistema previsional de la Argentina –uno de los negocios centrales y más redituables para los actores financieros concentrados transnacionales, multinacionales y ciertos grupos locales—; la re-estatización de la Fábrica de Aviones de Córdoba en manos de la norteamericana Lockheed Martin; y el impulso a Ley de Servicios Audiovisuales, entre otras.

El “paro agrario” constituye el punto de quiebre estratégico en el estado de correlación de fuerzas en Argentina, que reconfigura completamente la composición de fuerzas del gobierno. Este punto de quiebre acelera el proceso político generado a partir del estallido del 2001. La aparente “recomposición institucional” que se da desde 2003, en realidad es el proceso de desenvolvimiento de las contradicciones y la profundización de las tensiones en la lucha por la hegemonía antes de su estallido, cuando todos los intereses crecen y se encuentran con capacidad de expresarse institucionalmente, es decir, antes del punto en donde la reproducción de ese equilibrio catastrófico se vuelve imposible. Esto es lo que se fractura con el llamado paro agrario y es a partir de este momento que el “gobierno” deja de albergar la multiplicidad de actores y “modelos” que anteriormente contenía, para profundizar su definición hacia alguno de las opciones estratégicas que excluyen necesariamente a las otras. Es allí donde las fuerzas del proyecto nacional, popular y latinoamericano adquieren mayor visibilidad, fuerza y capacidad de influir en las políticas de gobierno, lo que profundiza la crisis y agudiza las contradicciones entre proyectos estratégicos, dando lugar a un nuevo momento de la lucha hegemónica en Argentina.

¹ Castellani, Ana y Szkolnik, Mariano, 2005. "Devaluacionistas y dolarizadores. La construcción social de las alternativas propuestas por los sectores dominantes ante la crisis de la Convertibilidad. Argentina 1999-2001".

² Schorr, M. y Ortiz R. 2006. "Crisis del Estado y pujas interburguesas. La política de la hiperinflación en Los años de Alfonsín ¿El poder de la democracia o la democracia del poder? Coordinado por Alfredo R. Pucciarelli. Siglo Veintiuno Editores.

³ La Nación, 9 de diciembre de 2001, "Empresarios y gremialistas piden frenar el proceso de dolarización".

⁴ Clarín, 22 de junio de 2001.

⁵ En una entrevista a página 12, hecha durante el mes de enero de 2002, Duhalde afirmó: Me sorprendió la unanimidad de los partidos políticos cuando los convoqué para crear ese movimiento productivo que, a mi criterio, debería ser la base del poder futuro. Yo venía sosteniendo que en el centro de las decisiones políticas de un gobierno tienen que sentarse los que producen, los que trabajan. Es así en todos los países que defienden sus intereses y trabajan juntos empresarios, productores y el poder político.

Mire, de mí pueden decir cualquier cosa, pueden esperar que me equivoque porque soy un ser humano, pero jamás que traicione a mi país. Por ninguna razón. El que ataca los intereses nacionales es un traidor."

⁶ Clarín, 29 de mayo de 2002. Cómo se observa en la composición, el dominio casi absoluto es de los llamados grupos económicos locales aunque, como sucede en la mayor parte de las entidades empresarias, se encuentran en su interior actores de otro tipo en una situación subordinada.

⁷ Aunque muchas de estas empresas se opusieron a la forma de salida de la convertibilidad por su exposición en las empresas de servicios privatizadas.

⁸ "La devaluación produjo una caída del 25% en los salarios reales, el deterioro más grande en los últimos 25 años, mientras que la población bajo la línea de pobreza pasó del 38% en octubre de 2001 a 53% en mayo de 2002" GAGGERO, Alejandro y Andrés Wainer, 2004. "Crisis de la convertibilidad: el rol de la UIA y su estrategia para el (tipo de) cambio". Realidad Económica, no. 204.

⁹ "Debe tenerse en cuenta que, si bien los grupos económicos miembros de la UIA son muy poderosos a nivel local, en una economía globalizada la mayoría son "jugadores" muy pequeños y encuentran enormes límites para competir libremente en el mercado con los grandes conglomerados internacionales." Schorr, Martín y Andrés Wainer, 2005. "A propósito de la crisis del Mercosur. Notas sobre el proyecto de país de la "burguesía nacional" en la Argentina." Realidad Económica, no215.

¹⁰ La **inversión pública creció un 517% entre 2003 y 2008, mientras que la privada lo hizo en un 107%** en ese mismo período, a precios de 1993, según cifras del *Centro de Estudios para la Producción* de la Secretaría de Industria, Comercio y Pymes. La tasa de **inversión pública sobre PBI llegó a ser de 5% en el 2008**, mientras que en toda la década del 90' no llegó a superar en sus picos máximos el 2%.

¹¹ Como observa el diario financiero especializado con sede en Washington, The Wall Street Journal, "el Estado domina la economía como dueño y regulador... bajo el autoritarismo de Kirchner, **Argentina pasó de un capitalismo democrático, aunque débil, a un sistema económico controlado por el estado**, cada vez más represivo y aislado". En diario Perfil, 16 de junio de 2009.

¹² Los casos más importantes de "argentinización" en el sector energético son: Grupo Eskenazi entra a YPF, Electroenergía y Enarsa (empresa estatal de energía) compran 50% de la controladora de Transener a

Petrobras, Pampa Energía tiene 50% de la empresa controladora de Transener, Pampa Energía compra Edenor a EDF, Pampa Energía compra centrales eléctricas a Powerco y Camuzzi, Sadesa compra centrales eléctricas a Total y CMS, IATE controla Edemsa (Mendoza) de EDF, Ick y Banco de Santiago del Estero compran Edese (Sgo. del Estero) de Houston Energy, Grupo Chemo compra 19,6% de Gas Ban a Gas Natura. Ver: Diego Mansilla, Grupo MORENO, boletín N°259, Buenos Aires, 26 de agosto de 2008.

¹³ El Área de Libre Comercio para las Américas era una propuesta llevada adelante, principalmente, por el Partido Republicano de los Estados Unidos desde los inicios de la década de 1990. Consiste en la creación de un área sin barreras arancelarias para el flujo de mercancías y capitales (aunque sí de personas) de todo el continente Americano.

¹⁴ Info Bae, 31 de mayo de 2006. Estas declaraciones fueron realizadas ante un auditorio de 400 empresarios y según el diario La Nación del mismo día, fue la parte más aplaudida del discurso.

¹⁵ Ver Entrevista a Roberto Lavagna, AduanaNews, 1 de noviembre de 2002.

¹⁶ La Nación, 16 de julio de 2005.

¹⁷ La subsecretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, opinó: "Los salarios no producen inflación, no son los responsables, no se puede generalizar de esta manera". La Nación, 16 de julio de 2005.

¹⁸ La Nación, 18 de julio de 2005.

¹⁹ Página 12, 13 de julio de 2007.

²⁰ El entramado de actores económicos-sociales que apoya y/o compone el "kirchnerismo" para el año 2005-2006, excluyendo los aliados que ocupan posiciones de gobierno, como por ejemplo las empresas europeas (como es el caso de la Repsol YPF), son: el sector industriales de la UIA conducido por Techint, ALUAR, IMPSA (Pescarmona), Roggio, la línea textil, la línea blanca y la línea calzado, ADIMRA (asociación de las Pymes metalúrgicas). El sector bancario nucleado en Abappra (asociación de bancos públicos y privados), conducido en ese momento por Carlos Heller (Partido Comunista), donde se encuentran los bancos pertenecientes al estado (Nación, Provincia, Ciudad) y algunos privados cooperativos (Credicoop, etc.); como así también el sector bancario local reunido en ADEBA en oposición a la cámara bancaria que agrupa los bancos extranjeros, ABA.

Por el lado de las pequeñas y medianas empresas las cámaras más importantes que manifiestan su apoyo (además de las nucleadas en la UIA) son CAME, APYME, CGE y, en ese momento, expresaba un apoyo crítico la Federación Agraria Argentina.

También se encuentran dentro de la ecuación de poder de desarrollo industrial nacional-regional las empresas estatales estratégicas tales como Astilleros Río Santiago e INVAP.

En cuanto a los sectores trabajadores, desocupados y barriales podemos mencionar a la CGT conducida por Hugo Moyano y el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA); la CTA con sus distintas posiciones y expresiones, incluso las que políticamente se posicionan como antiKirchenrista pero en sus posiciones coincide parcialmente en políticas de gobierno (contra ALCA, Derechos Humanos, integración regional, etc.); los movimientos sociales de inserción barrial y en desocupados como Barrios de Pie (Patria Libre), FTV (D' Elia), Movimiento Evita, etc.

²¹ La Nación, 5 de noviembre de 2005.

²² Citado por el diario Clarín, 4 de enero de 2006. Por otro lado, en el marco de esta estrategia, la deuda externa pasó de 160% del PBI en el año 2002 al 45% del PBI a fines de 2009.

²³ Entre el año 2002 y 2006 se crearon 90.000 nuevas PYMES. La Nación, 6 de diciembre de 2007, "Pymes, las mayores creadoras de empleo"

²⁴ Anthony Giddens, *La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia*. Buenos Aires, Taurus, 2000.

²⁵ Lo financiero no es igual a lo especulativo como comúnmente se cree. Lo financiero implica la centralización en una misma unidad de negocios de la banca, la industria, el comercio, el agro, la comunicación, etc. La primera forma de capital financiero es la internacional que emerge a finales del siglo XIX y que estudian desde distintas perspectivas V. I. Lenin, J. A. Hobson y R. Hilferding.

²⁶ Esto está trabajado con mayor profundidad en: Merino, Gabriel, "Globalismo financiero, territorialidad, progresismo y proyectos en pugna", trabajo presentado en las XII Jornadas de Investigación del Centro de Investigaciones Geográficas de la UNLP-Argentina, noviembre de 2010. Y a publicarse en una versión mejorada en la Revista *Geograficando* de la UNLP.

²⁷ Diego Schurman, "Los planes del gobierno para Repsol-YPF", Página 12, 1 de abril de 2007.

²⁸ Ver Walter Formento, "*La crisis en la forma de organización de los partidos políticos*", ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano de Sociología, San Pablo, Brasil, septiembre de 1997.

²⁹ Walter Formento, "El Paro Agrario: retenciones, desabastecimiento, inflación y después", Publicaciones del CIEPE, 2008.

³⁰ Sebastián Ortiz, *La Patria Terrateniente*, Peña Lillo/Ediciones Continente, Buenos Aires, 2010.

³¹ Enrique Arceo, Eduardo Basualdo y Gustavo Lugones, *La crisis mundial y el conflicto del agro*, Buenos Aires, Editorial La Página, 2009.

³² García Linera, Álvaro. **Empate catastrófico y punto de bifurcación**. En: *Crítica y emancipación: Revistalatinamericana de Ciencias Sociales. Año 1, no. 1 (jun. 2008-)*. Buenos Aires : CLACSO, 2008